



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXV - N° 736

Bogotá, D. C., jueves, 18 de junio de 2026

EDICIÓN DE 22 PÁGINAS

DIRECTORES:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 294 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se establecen los mecanismos para fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y se crea el beneficio de protección para ocupaciones informales.

Bogotá, D. C., junio de 2026

Honorable Representante

CAMILO ESTEBAN ÁVILA MORALES

Presidente Comisión Séptima

Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: **Ponencia primer debate del Proyecto de Ley número 294 de 2025 Cámara**, por medio del cual se establecen los mecanismos para fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y se crea el beneficio de protección para ocupaciones informales.

Respetado Presidente.

En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por medio del presente escrito nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley de la referencia.

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El pasado 1º de septiembre de 2025, fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley número 294 de 2025 y publicado en la **Gaceta del Congreso**

número 1846 de 2025. La iniciativa tiene como autoras a las Representantes Olga Lucía Velásquez y Olga Beatriz González.

La mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes designó como ponentes al Representante Héctor David Chaparro y a Juan Felipe Corzo.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

De acuerdo con el proyecto radicado, el objeto de la iniciativa consiste en fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y crear el beneficio de protección para ocupaciones informales.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

De acuerdo con las autoras, el proyecto de ley parte de la necesidad de fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales para garantizar que los recursos provenientes de las cotizaciones se utilicen de manera eficiente, transparente y acorde con los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social. La iniciativa sostiene que, aunque existe un marco normativo robusto, persisten vacíos en materia de vigilancia, control y optimización de los recursos administrados por las ARL, especialmente en lo relacionado con gastos administrativos, intermediación de seguros y destinación de recursos para actividades que no contribuyen directamente a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Asimismo, tal y como está sustentado por las autoras y publicado en la **Gaceta del Congreso** número 1846 de 2025, el proyecto se fundamenta en cifras del sistema que evidencian una alta siniestralidad

laboral y una cobertura significativamente menor para trabajadores independientes e informales frente a los trabajadores dependientes, lo que justifica la adopción de mecanismos que incentiven la prevención, mejoren la supervisión de las ARL y amplíen la protección a la población que desarrolla actividades económicas informales.

De otra parte, la iniciativa busca optimizar el uso de los recursos del sistema mediante mayores controles sobre los gastos administrativos, fortalecer la rendición de cuentas de las ARL, crear incentivos asociados a la reducción de la siniestralidad y establecer un Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional para trabajadores informales. Además, propone resolver la situación de obligaciones pensionales históricas derivadas del antiguo ISS y actualmente asumidas por Positiva, trasladándolas a la Nación a través del FOPEP para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Lo anterior se sustenta por parte de las autoras en el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que la seguridad social debe regirse por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y que sus recursos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Asimismo, toma como referencia la Ley 100 de 1993, que define la seguridad social integral como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos orientados a garantizar la protección de las personas frente a contingencias que afecten su salud y capacidad económica, mediante el uso adecuado y eficiente de los recursos disponibles. En ese contexto, se considera deber del Estado garantizar la correcta administración, vigilancia y destinación de los recursos del Sistema General de Riesgos Laborales, razón por la cual se propone fortalecer los mecanismos de control y optimización de dichos recursos para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos del sistema.

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES

| Texto radicado | Texto propuesto primer debate | Observaciones |
|---|--|---|
| <p>Artículo 8°. <i>Modificación del párrafo 5° del artículo 11 de la ley 1562 de 2012.</i> Modifíquese el párrafo 5°, del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, al cual se le incorpora</p> <p>el siguiente párrafo:</p> <p>En el Sistema de Riesgos Laborales, en ningún caso se podrá reconocer porcentaje de intermediación superior al 10% de la cotización, ni reconocer incentivos o beneficios a cualquier otro título tales como bonificación, sobrecomisión, o similares, lo cual controlará las entidades competentes de su vigilancia y control.</p> <p>Parágrafo: El ministerio del trabajo y la superintendencia financiera, regularán técnica y financieramente los porcentajes de inversión en promoción y prevención que las administradoras de riesgos laborales y los intermediarios de seguros deben garantizar a sus empresas afiliadas teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, el grado de riesgo y las cifras de siniestralidad laboral, siempre garantizando la suficiencia de la prima, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o demás normas que la regulen, complementen o sustituyan.</p> | <p>Artículo 8°. <i>Modificación del párrafo 5° del artículo 11 de la ley 1562 de 2012.</i> Modifíquese el párrafo 5°, del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, al cual se le incorpora</p> <p>el siguiente párrafo:</p> <p>En el Sistema de Riesgos Laborales, en ningún caso se podrá reconocer porcentaje de intermediación superior al 10% de la cotización, ni reconocer incentivos o beneficios a cualquier otro título tales como bonificación, sobrecomisión, o similares, lo cual controlará las entidades competentes de su vigilancia y control:</p> <p>Parágrafo: El ministerio del trabajo y la superintendencia financiera, regularán técnica y financieramente los porcentajes de inversión en promoción y prevención que las administradoras de riesgos laborales y los intermediarios de seguros deben garantizar a sus empresas afiliadas teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, el grado de riesgo y las cifras de siniestralidad laboral, siempre garantizando la suficiencia de la prima, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o demás normas que la regulen, complementen o sustituyan.</p> | <p>En primer lugar, se considera que no es posible determinar con claridad el alcance y objeto de la modificación propuesta. Si bien el encabezado del artículo señala que se modifica el párrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, el contenido normativo presentado no refleja una modificación específica de dicho párrafo. Por el contrario, el texto incorporado parece corresponder a una adición o modificación del cuerpo principal del artículo 11 y no de su párrafo 5°.</p> <p>Adicionalmente, la iniciativa incluye un nuevo aparte (párrafo) respecto del cual no existe certeza sobre su naturaleza jurídica, esto es, si se trata de un nuevo párrafo que se adiciona al artículo 11 o de la modificación de alguno de los párrafos actualmente vigentes. Esta falta de precisión en la identificación de las disposiciones que se pretenden modificar genera una inconsistencia de técnica legislativa que impide establecer con certeza los efectos jurídicos de la propuesta y, en consecuencia, dificulta su valoración y eventual incorporación al articulado.</p> |

V. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

Con base en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, según el cual “El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el congresista pueda encontrar”.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1°. El artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, quedará así:

(...)

a) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

b) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

c) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos, se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) *Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*

c) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.*

d) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés*

particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.*

f) *Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que la iniciativa es de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual, por lo que se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada congresista evaluarlos.

VI. IMPACTO FISCAL

Con el propósito de dar claridad sobre la discusión del presente proyecto de ley y en razón del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el proyecto de ley no genera impacto fiscal, toda vez que no ordena gasto adicional ni tampoco otorga beneficios tributarios de ningún tipo.

VII. PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia POSITIVA y solicitamos a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dar primer debate y aprobar el **Proyecto de Ley número 294 de 2025 Cámara**, por medio del cual se establecen los mecanismos para fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y se crea el beneficio de protección para ocupaciones informales.

Atentamente,



HÉCTOR DAVID CHAPARRO
Representante a la Cámara
Ponente



JUAN FELIPE CORZO
Representante a la Cámara
Ponente

**VIII) TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 294 DE
2025 CÁMARA**

por medio del cual se establecen los mecanismos para fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y se crea el beneficio de protección para ocupaciones informales.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto, fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y crear el beneficio de protección para ocupaciones informales.

TÍTULO I

**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

CAPÍTULO I

**Optimización de los Recursos de Riesgos
Laborales**

Artículo 2º. Límite de gastos de administración por las administradoras de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo, en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, determinará el límite máximo de los gastos de administración de los cuales pueden hacer uso las administradoras de riesgos laborales, considerando variables como el tamaño de la empresa, número de trabajadores, clase de riesgo, cobertura geográfica, población de bajos ingresos cubierta y costos de operación necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes.

Parágrafo 1º. El porcentaje destinado para los gastos de administración de las Administradoras de Riesgos Laborales será de hasta el 20% y se establecerán valores adicionales en función de los siguientes conceptos:

1. Por cobertura geográfica del 2%, cuando la respectiva Administradora del Riesgo Laboral opere con sucursales directas en por lo menos 23 departamentos donde al menos 3 estén ubicadas en departamentos de cuarta categoría.

2. Por cubrimiento de población de bajos ingresos, un 2% adicional. Para los efectos de la presente ley se entenderá población de bajos ingresos, los trabajadores que devenguen máximo un salario mínimo mensual vigente y deberá reconocerse el porcentaje adicional, cuando el número de dichos trabajadores afiliados a la respectiva Administradora representen más del 50% del total de sus afiliados.

3. Por cubrimiento en actividades de alta siniestralidad o de interés público, un 1%. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicará antes del 30 de junio de cada año las actividades

que serán cubiertas con estas variables por alta siniestralidad o de especial interés como política de incentivo estatal.

Parágrafo 2º. El Ministerio del Trabajo determinará anualmente los límites de gastos administrativos de acuerdo con las variables antes referidas. En todo caso, no serán inferiores al promedio de los del sector asegurador en general.

Artículo 3º. Recaudos pila micro y pequeña empresa. En los casos de empleadores con menos de 10 trabajadores y que deban realizarse a través de la Planilla Única de Liquidación de Aportes (PILA), no generarán costos a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales y, de ser necesario, estará integrada con los demás componentes del Sistema Integral de Seguridad Social.

Artículo 4º. Prohibiciones en el uso de los recursos del sistema de riesgos laborales. Los gastos administrativos de las Administradoras de Riesgos Laborales no incluyen los recursos destinados para actividades de promoción y prevención en el Sistema General de Riesgos Laborales. En todo caso, se prohíbe financiar con recursos del Sistema de Riesgos Laborales, entre otros, eventos empresariales, capacitaciones a representantes de empresas dentro y fuera del país, suministro de publicidad, bienes y gastos diferentes a los requeridos para el control de los riesgos laborales asegurados. En ningún caso las Administradoras de Riesgos Laborales podrán efectuar devoluciones o retornos en dinero o bienes a las empresas afiliadas o a la aportante.

Artículo 5º. Subrogación por responsabilidad por culpa grave y dolo. Cuando se demuestre a título de culpa grave o dolo que un tercero fue causante de un riesgo laboral amparado por el Sistema General de Riesgos Laborales, las ARL deberán subrogarse contra el tercero responsable por las prestaciones asistenciales y económicas pagadas al trabajador afectado o sus beneficiarios.

Artículo 6º. Incentivos por mejora en indicadores en la reducción de siniestralidad y optimización de gastos administrativos. Adiciónese el literal d) al artículo 88 del Decreto Ley 1295 de 1994, así:

Crear incentivos destinados a fomentar la mejora de los indicadores de reducción de siniestralidad, los cuales deberán ser reglamentados por el Ministerio de Hacienda dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, teniendo en cuenta los indicadores específicos de siniestralidad.

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, dispondrá los mecanismos y establecerá los procedimientos y criterios, para que, de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, se otorguen incentivos financieros a las Administradoras de Riesgos Laborales que logren mejoras significativas en los indicadores de impacto del sistema, como la reducción de la siniestralidad y la optimización de la administración de recursos.

Artículo 7°. Variación de las cotizaciones del sistema general de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo reglamentará en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley la variación de las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, de acuerdo con los indicadores de impacto, especialmente la siniestralidad y la accidentalidad laboral de las empresas afiliadas y aportantes, con base en la “Tabla de cotizaciones mínimas y máximas” y “La variación del monto de cotización” establecidas en los artículos 27 y 33 del Decreto Ley 1295 de 1994 o, demás, normas que complementen, deroguen o sustituyan.

Artículo 8°. Reserva especial de enfermedad laboral. La Superintendencia Financiera de Colombia contará con un tiempo de 3 meses para la consolidación de información y con un mes adicional para el diseño y aplicación de modelos idóneos para la estimación de los montos máximos que las Administradoras de Riesgos Laborales deberán tener para la reserva especial de enfermedad laboral, según lo dispuesto en el Decreto número 2555 de 2010. Este tiempo deberá ser suficiente para contar con resultados de contraste y así dar cumplimiento a los presupuestos de control y revisión. Después de este período de dos (2) meses, las Administradoras de Riesgos Laborales podrán liberar los excesos en el siguiente mes. Estos cálculos deberán realizarse con periodicidad semestral.

Parágrafo: En todo caso, la reserva especial por enfermedad laboral no podrá ser inferior al monto de 10% del capital requerido para la constitución del ramo de riesgos laborales, actualizado cada año con el IPC.

Artículo 9°. Aseguramiento de riesgo de deslizamiento. Adiciónese el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:

Parágrafo II. De igual manera, el Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras que tengan aprobado el ramo de riesgos laborales cubrir el riesgo del incremento que, con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de invalidez y/o sobrevivencia en dicho ramo, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.

Artículo 10. Asunción de obligaciones pensionales no contempladas en el cálculo actuarial. Las obligaciones de pago de las reservas del ramo de Riesgos Laborales que se encuentren insolutas y aquellas que se deban pagar a futuro, por concepto de pensiones o reliquidaciones que no se encuentren incluidas en el cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en desarrollo del artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 y su decreto reglamentario, así se hayan derivado de

fallos judiciales ejecutoriados en cualquier tiempo, serán asumidas por la Nación y transferidas al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP).

Le corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la elaboración del cálculo actuarial correspondiente y la inclusión de dichas obligaciones en la nómina de pensionados, las cuales serán pagadas con los recursos trasladados al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) con cargo al Presupuesto General de la Nación.

CAPÍTULO II

Fortalecimiento de vigilancia, inspección y control en el Sistema General de Riesgos Laborales

Artículo 11. Fortalecimiento de la vigilancia y control en riesgos laborales a través de los indicadores de impacto. Las Administradoras de Riesgos Laborales presentarán anualmente a las comisiones económicas y séptimas conjuntas de Cámara y Senado y a los actores del Sistema General de Riesgos Laborales un informe detallado relacionado con los indicadores de impacto asociados a la gestión que llevan a cabo para prevenir la siniestralidad laboral en sus empresas afiliadas, así como sobre la destinación y administración de los recursos que ingresan por concepto de cobertura en esta materia. Los indicadores de impacto estarán asociados a los controles de ley establecidos por el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias.

El Ministerio del Trabajo y la Contraloría General de la República emitirán un concepto sobre el informe presentado por las Administradoras de Riesgos Laborales, de acuerdo con sus respectivas competencias. Dicho concepto será remitido a las comisiones económicas y séptimas conjuntas de Cámara y Senado para su análisis y consideración. El informe deberá ser presentado a más tardar el 30 de junio de cada año.

Artículo 12. Sanciones para operar el ramo de los riesgos laborales. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá aplicar el régimen sancionatorio de las entidades vigiladas a las Administradoras de Riesgos Laborales cuando se demuestre mediante el proceso sancionatorio, el uso indebido y reiterado de los recursos del Sistema General de Riesgos Laborales. La ley establecerá las causales específicas, el procedimiento y los efectos de esta medida, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores afiliados y la continuidad en la prestación de los servicios.

Artículo 13. Rendición de cuentas en riesgos laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales, de manera individual, deberán presentar un informe de gestión anual a sus empresas afiliadas y a los trabajadores bajo su cobertura, así como a la ciudadanía a través de audiencias públicas.

Artículo 14. *Veeduría ciudadana en riesgos laborales.* Se crearán veedurías ciudadanas para coadyuvar a la vigilancia y control de los recursos que ejecutan las Administradoras de Riesgos Laborales destinados al Sistema General de Riesgos Laborales.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional reglamentará en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la promulgación de esta ley, los requisitos y el proceso de conformación de las veedurías ciudadanas, así como sus funciones específicas, derechos y deberes. La reglamentación incluirá los requisitos técnicos que estas deben cumplir, así como planes de capacitación sobre el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales y la reglamentación sobre su flujo de recursos.

Parágrafo 2º. Las veedurías ciudadanas presentarán informes semestrales de sus hallazgos y recomendaciones a las entidades competentes, quienes deberán dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor a tres (3) meses.

TÍTULO II

BENEFICIO SOLIDARIO POR RIESGO OCUPACIONAL (BSRO)

Artículo 15. *Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional (BSRO).* Créese el Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional (BSRO), dirigido a la población informal beneficiaria de cualquiera de los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Este beneficio consistirá en una ayuda económica reconocible a aquellos individuos que, debido a accidentes o enfermedades relacionadas con su ocupación informal, se encuentren imposibilitados para realizar actividades productivas, el cual será administrado por una aseguradora de vida con autorización para la explotación del ramo de Beneficios Económicos Periódicos (BEP).

Artículo 16. *Beneficiarios.* El Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional (BSRO), estará dirigido a la población de ocupación informal que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Formar parte de los beneficiarios de cualquiera de los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
2. No estar vinculado laboralmente.
3. El accidente o enfermedad deberá ser con causa o con ocasión de la ocupación informal del beneficiario.

Artículo 17. *Monto del beneficio.* El monto del beneficio será determinado por la Aseguradora de Vida encargada de la administración de acuerdo con la cobertura definida y los recursos disponibles.

Artículo 18. *Administración del beneficio.* El beneficio será administrado por la Aseguradora de Vida designada, para lo cual coordinará con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 19. *Operación del beneficio.* La aseguradora de vida designada implementará un modelo de operación o aseguramiento acorde

con las necesidades y posibilidades del beneficio, garantizando que con los recursos disponibles se tenga la mayor cobertura posible.

Artículo 20. *Financiación del beneficio.* Aplicando el principio de solidaridad definido en la Constitución Política de Colombia, el beneficio será financiado con los recursos del 23% del Fondo de Riesgos Laborales, que se constituye con los aportes de todos los cotizantes al Sistema General de Riesgos Laborales.

Parágrafo. Adiciónese el literal i) de la Ley 1562 de 2012, así:

i) Financiar el Beneficio Solidario por Riesgo Ocupacional (BSRO).

Artículo 21. *Riesgos cubiertos.* Los beneficios cubrirán los riesgos generados por accidentes o enfermedades relacionadas con la ocupación informal del beneficiario, que serán definidos por la aseguradora designada en coordinación con el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 22. *Coexistencia con el sistema de seguridad social en salud.* La cobertura no suplirá la del régimen subsidiado en salud.

Artículo 23. *Beneficios para el núcleo familiar en caso de fallecimiento.* Al momento en que el desempeño ocupacional del núcleo familiar se vea disminuido en caso de muerte, este beneficio pasará al cónyuge y/o compañero permanente, primer grado de consanguinidad y/o primer grado de afinidad. En caso de haber dos o más posibles beneficiarios, dicho beneficio será distribuido de manera equitativa entre las partes. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) definirá la aplicabilidad de este beneficio en dichos eventos.

Artículo 24. *(NUEVO) Apropiación presupuestal.* La apropiación de los recursos para el funcionamiento de este Fondo será realizada de manera inmediata al momento de la entrada en vigencia de esta ley.

Los beneficios empezarán a aplicarse dentro de los seis (6) meses después de la promulgación de la presente ley.

TÍTULO III

NORMAS GENERALES EN EL RÉGIMEN DE SEGUROS

Artículo 25. *Fortalecimiento del aseguramiento.* Con el fin específico de fortalecer el aseguramiento de riesgos de vida y las coberturas asociadas de la población colombiana, las entidades y organismos del Estado, las entidades públicas de todos los niveles, las entidades territoriales, así como las empresas y sociedades de economía mixta con participación pública, deberán asociarse o celebrar convenios y/o contratos interadministrativos o de asociación con la aseguradora pública de vida, con el fin de aunar esfuerzos para cubrir con seguros de grupo, individuales o colectivos a sus grupos de interés internos y externos; con especial énfasis en la población vulnerable o de bajos ingresos.

Lo anterior en aplicación del principio de solidaridad, en ejercicio del deber de colaboración

armónica y aunando esfuerzos para el logro de las políticas públicas para ampliar las coberturas en programas de protección y bienestar a la población.

Artículo 26. Especialidad de las aseguradoras en los procesos de selección. Las invitaciones, convocatorias y procesos de selección, en procesos de contratación de seguros, tanto de entidades públicas como privadas, deberán permitir la libre participación de oferentes, y no podrán solicitar ofertas para el aseguramiento de riesgos sobre la vida, y de riesgos generales exigiendo que se realice por una sola aseguradora, por los que se deberá permitir la participación de aseguradoras de vida en dichos procesos. Hacerlo implicaría atentar contra las condiciones de mercado, selección objetiva y contra la regulación en materia de seguros, lo cual será supervisado por la Superintendencia de Industria y Comercio, con sujeción al régimen sancionatorio de acuerdo con las normas que rigen la competencia.

Artículo 27. Seguro de vida de seguridad y vigilancia privada. En los términos de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1920 de 2018 o norma que la sustituya, cada empresa, cooperativa especializada, departamento de seguridad y vigilancia privada contratará anualmente un seguro de vida grupo o colectivo vida que ampare al personal operativo de su respectiva organización. Dicho seguro se constituye en un seguro obligatorio, colectivo o de grupo bajo el criterio de pluralidad de asegurados, no contributivo y con designación de beneficiarios a título gratuito.

Artículo 28. Efectos de la mora en las cotizaciones de trabajadores independientes obligatorios y voluntarios. El no pago de dos (2) períodos consecutivos de las cotizaciones de los trabajadores independientes dará lugar a la suspensión de la afiliación por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, excepto para los trabajadores independientes obligatorios cuya cotización está a cargo del contratante en los riesgos IV y V.

Para tal efecto, la entidad Administradora de Riesgos Laborales deberá enviar a la última dirección conocida del afiliado una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a un (1) mes después del no pago de los aportes, señalando la situación de incumplimiento y las consecuencias que le acarrea. La comunicación constituirá al afiliado en mora.

Durante el período de suspensión no habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos Laborales.

Artículo 29. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


HÉCTOR DAVID CHAPARRO
Representante a la Cámara
Ponente


JUAN FELIPE CORZO
Representante a la Cámara
Ponente

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 304 DE 2025 CÁMARA

por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia.

Bogotá, D. C., junio de 2026

Honorable Representante

CAMILO ESTEBAN ÁVILA MORALES

Presidente Comisión Séptima

Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Ponencia primer debate del **Proyecto de Ley número 304 de 2025 Cámara**, por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia.

Respetado Presidente.

En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por medio del presente escrito nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley de la referencia.

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El pasado 2 de septiembre de 2025, fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley número 304 de 2025 y publicado en la *Gaceta del Congreso* número 1690 de 2025. La iniciativa tiene como autor al Representante Silvio José Carrasquilla.

La mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes, designó como ponentes al Representante Héctor David Chaparro y Andrés Eduardo Forero.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

De acuerdo con el autor, la iniciativa tiene por objeto la fijación de un salario mínimo profesional, un salario mínimo tecnológico y un salario mínimo técnico con el fin de que el campo profesional, tecnológico y técnico en Colombia tenga un pago entre los 1.5 y los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada año.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

De acuerdo con el autor, los colombianos se enfrentan a la realidad de terminar sus respectivas carreras universitarias para ganar sueldos que no corresponden con su preparación académica ni con la inversión que realizaron al momento de ingresar a la universidad. Esto genera múltiples consecuencias negativas:

1. Desincentiva el acceso y la permanencia en la educación superior, especialmente en estratos socioeconómicos bajos.
2. Limita la movilidad social y la construcción de un proyecto de vida digno.
3. Aumenta el endeudamiento educativo, en especial a través de mecanismos como el ICETEX,

que en muchos casos se vuelven impagables ante la baja remuneración.

4. Genera fuga de talentos y desmotivación para la innovación, la investigación y el emprendimiento.

5. Contribuye a la informalidad laboral, ya que muchos egresados terminan aceptando empleos por debajo de su cualificación o en condiciones de inestabilidad jurídica.

Al establecer un piso mínimo de remuneración diferenciado para quienes han alcanzado una titulación profesional, tecnológica y técnica, logrando así tener un salario que vaya más acorde con los esfuerzos entregados durante el tiempo de estudio, los colombianos tendrían más incentivos para así seguir aumentando su nivel académico, generando así más competitividad.

Justifica que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 25, establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”, lo cual implica que el Estado tiene el deber de intervenir para evitar que los trabajadores, especialmente aquellos con formación superior, se vean sometidos a remuneraciones que no reconocen su esfuerzo, preparación ni inversión educativa.

Asimismo, que el artículo 53 superior exige que toda legislación laboral respete principios como la remuneración mínima, vital y móvil, así como la proporcionalidad entre la calidad del trabajo y el salario, y la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Estos principios resultan vulnerados cuando técnicos, tecnólogos y profesionales perciben ingresos apenas equivalentes al salario mínimo legal o incluso inferiores, a pesar de contar con formación formal y acreditada.

IV. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES

Por años, el acceso a la educación superior ha sido uno de los principales caminos para que los jóvenes colombianos puedan superar brechas de pobreza, acceder a mejores oportunidades, tener un ascenso social y construir un proyecto de vida digno para sí mismos y sus familias.

Sin embargo, la realidad laboral a la que enfrentan muchos jóvenes egresados en Colombia no corresponde a la expectativa que tienen, pues cada vez es más frecuente escuchar a profesionales, tecnólogos y técnicos que, pese a sus títulos educativos y los años de estudio y preparación, reciben remuneraciones similares a las de empleos que no exigen formación especializada. Esta situación genera un desincentivo en los jóvenes para estudiar, así como representa una frustración y desconfianza en las instituciones, dejando la percepción de que el esfuerzo educativo no es recompensado de manera justa.

La presente iniciativa busca enviar un mensaje claro a la sociedad colombiana: el estudio, la capacitación y el esfuerzo personal deben ser valorados. El país necesita recuperar la confianza de las nuevas generaciones en la educación como herramienta de transformación social y como mecanismo legítimo para mejorar las condiciones de vida.

De igual manera, esta iniciativa constituye una apuesta por el fortalecimiento de la clase media colombiana. Un país que remunera adecuadamente a sus profesionales, tecnólogos y técnicos es un país que estimula el consumo, dinamiza las economías regionales, fortalece el tejido productivo y genera mayores oportunidades para las familias.

Igualmente, la propuesta contribuye a reducir brechas sociales y territoriales. En muchas regiones de Colombia, acceder a la educación superior implica superar obstáculos económicos, geográficos y familiares significativos. Reconocer de manera efectiva el esfuerzo de quienes logran culminar su proceso formativo constituye también una medida de equidad y de reconocimiento al mérito.

En consecuencia, este proyecto de ley no solamente busca establecer un criterio de remuneración mínima para determinados niveles de formación académica. Su propósito es reivindicar el valor social de la educación, fortalecer las expectativas de progreso de la ciudadanía, promover la movilidad social y construir una sociedad en la que el conocimiento, el trabajo calificado y el esfuerzo personal sean efectivamente reconocidos.

V. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

Con base en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, según el cual: “*El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el congresista pueda encontrar*”.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1°. El artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:

(...)

a) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

b) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

c) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos, se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que la iniciativa es de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual, por lo que se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019, sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada congresista evaluarlos.

VI. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, todo proyecto de ley que implique gasto público o genere efectos fiscales debe hacer explícito su impacto presupuestal y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Asimismo, la citada disposición prevé la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el trámite legislativo, con el fin de emitir concepto sobre la consistencia fiscal de la iniciativa.


En cumplimiento de dicho mandato legal, durante el trámite del presente proyecto fueron remitidas diversas solicitudes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de conocer la posición oficial del Gobierno nacional respecto

de la viabilidad fiscal de la propuesta, así como los eventuales impactos presupuestales derivados de su implementación. No obstante, pese a los requerimientos formulados, la cartera ministerial no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la materia, limitándose a informar que el proyecto sería objeto de estudio para efectos de determinar su viabilidad fiscal, sin que a la fecha se haya allegado el concepto correspondiente.

En consecuencia, si bien los ponentes consideran que la iniciativa persigue fines constitucionalmente legítimos relacionados con la dignificación del trabajo, el reconocimiento de la formación técnica, tecnológica y profesional y la promoción de la movilidad social, resulta indispensable que durante el curso restante del trámite legislativo se cuente con un pronunciamiento expreso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre su impacto fiscal y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Por tal razón, la presente ponencia positiva se formula bajo el entendido de que el Gobierno nacional deberá emitir el concepto fiscal correspondiente antes de la culminación del trámite legislativo, de manera que el Congreso de la República cuente con todos los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión definitiva sobre la iniciativa. En efecto, la ausencia de un análisis fiscal integral por parte de la autoridad competente constituye un aspecto que necesariamente deberá ser esclarecido antes de la aprobación final del proyecto, garantizando así el cumplimiento de las exigencias previstas en la Ley 819 de 2003 y la sostenibilidad de las medidas propuestas.

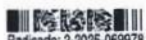
Oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:



Hacienda

2. Despacho del Viceministro General

Honorable Representantes
HÉCTOR DAVID CHAPARRO
ANDRÉS FORERO MOLINA
 Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 Carrera 7 No. 8-68, Edificio Nuevo del Congreso
 Bogotá D.C.,



Radicado: 2-2025-065978
 Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2025 14:58

Radicado entrada
 No. Expediente 55010/2025/OFI

Asunto: Respuesta petición No. 1-2025-103109 - Solicitud de concepto técnico de Impacto fiscal - Proyecto de Ley No. 304 de 2025 Cámara.

Respetados Representantes:

En atención a la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual se solicita concepto técnico sobre el impacto fiscal del Proyecto de Ley No. 304 de 2025 Cámara "por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia", actualmente en trámite en el Congreso de la República, en el marco de las competencias de este Ministerio establecidas en el Decreto 4712 de 2008¹, se responde en los siguientes términos:

La iniciativa en mención se encuentra en etapa de publicación, según consta en la Gaceta del Congreso No. 1690 de 2025, página 11, la cual contiene el texto radicado el día 3 de septiembre de 2025. Cabe señalar que, al revisar la exposición de motivos del referido proyecto de ley, se evidenció que el ponente no hace referencia a los costos fiscales de la iniciativa y a la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003².

En consecuencia, en desarrollo del trámite legislativo, y en cumplimiento de lo establecido en la norma citada, las áreas técnicas de esta Cartera se encuentran analizando el referido Proyecto de Ley, con el fin de revisar la consistencia de los costos fiscales, las posibles fuentes de financiación asociadas y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

¹ Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
² Colombia, Ley 819 de 2003. "Por la cual se otorgan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"



VII. PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia POSITIVA y solicitamos a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dar primer debate y aprobar el **Proyecto de Ley número 304 de 2025 Cámara, por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia.**

Atentamente,

HÉCTOR DAVID CHAPARRO
Representante a la Cámara
Ponente

ANDRÉS EDUARDO FORERO
Representante a la Cámara
Ponente

HÉCTOR DAVID CHAPARRO
Representante a la Cámara
Ponente

ANDRÉS EDUARDO FORERO
Representante a la Cámara
Ponente

* * *

VIII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 304 DE 2025 CÁMARA

por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto, finalidad y alcance de la ley. La presente ley tiene por objeto la fijación de un salario mínimo profesional, un salario mínimo tecnológico y un salario mínimo técnico con el fin de que el campo profesional, tecnológico y técnico en Colombia tengan un pago digno en respuesta al tiempo y esfuerzos dedicados a sus estudios durante su carrera.

Artículo 2º. Salario mínimo profesional. Se entiende por salario mínimo profesional el salario mínimo asignado a los profesionales universitarios de cualquier campo.

Parágrafo. El salario mínimo profesional será el equivalente a dos punto cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada año.

Artículo 3º. Salario mínimo tecnológico. Se entiende por salario mínimo tecnológico al salario mínimo asignado a los graduados con título tecnológico en cualquier campo.

Parágrafo. El salario mínimo tecnológico será el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada año.

Artículo 4º. Salario mínimo técnico. Se entiende por salario mínimo técnico al salario mínimo asignado a los graduados con título técnico en cualquier campo.

Parágrafo. El salario mínimo técnico será el equivalente a uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada año.

Artículo 5º. Cálculo del salario. Tanto el salario mínimo profesional como el salario mínimo tecnológico y el salario mínimo técnico tendrán como base de su cálculo el salario mínimo legal mensual de cada año establecido por el Gobierno nacional.

Artículo 6º. Condiciones laborales. La implementación del salario mínimo profesional, salario mínimo tecnológico y salario mínimo técnico no podrá desmejorar las condiciones laborales actuales de los trabajadores.

Artículo 7º Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias.

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 484 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021.

Bogotá, D. C., junio 5 de 2026

Honorable Representante

CAMILO ESTEBAN ÁVILA MORALES

Presidente

Comisión Séptima Constitucional Permanente
Cámara de Representantes

Asunto: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley número 484 de 2025 Cámara.

Estimado presidente,

En cumplimiento del encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992 artículos 174 y 175, en nuestra calidad de ponentes, nos permitimos rendir informe de ponencia positiva para primer debate del **Proyecto de Ley número 484 de 2025 Cámara, por medio del cual se ajusta el calendario electoral**

de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021.

Cordialmente;



AGMETH JOSÉ ESCAF
TIJERINO
Ponente Coordinador
Representante a la Cámara por
Atlántico
Pacto Histórico



MARIA EUGENIA LOPERA
MONSALVE
Ponente
Representante a la Cámara por
Antioquia
Partido Liberal

INFORME DE PONENCIA POSITIVO PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 484 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021

En atención a la designación realizada por la mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, nos permitimos rendir INFORME DE PONENCIA POSITIVO para primer debate al **Proyecto de Ley número 484 de 2025 Cámara**, por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021.

El presente informe se desarrolla conforme al siguiente contenido:

1. Objeto del proyecto
2. Trámite de la iniciativa
3. Antecedentes del proyecto
4. Impacto fiscal
5. Conflicto de interés
6. Proposición
7. Texto propuesto para primer debate

1. Objeto del proyecto

El presente proyecto de ley tiene como propósito ajustar y armonizar el calendario electoral de los organismos de acción comunal en Colombia, mediante la modificación de las fechas de elección de sus dignatarios previstas en la Ley 2166 de 2021, con el fin de evitar su coincidencia con otros procesos electorales nacionales y territoriales. La iniciativa busca fortalecer la democracia comunal, garantizar una mayor participación de los afiliados, facilitar la labor de los tribunales de garantías y asegurar que los procesos de afiliación, organización y elección se desarrollen bajo principios de transparencia, legalidad, eficiencia y seguridad jurídica, contribuyendo así al fortalecimiento institucional de los organismos de acción comunal como escenarios fundamentales de participación ciudadana y desarrollo comunitario.

2. Trámite de la iniciativa

El Proyecto de Ley número 484 de 2025 (Cámara) fue radicado el 26 de noviembre de 2025. El día 15 de abril de 2026, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional

Permanente de la Cámara de Representantes, se designó como ponentes para primer debate del Proyecto de Ley 484 de 2025 a los representantes Agmeth José Escaf Tijerino (coordinador ponente) y María Eugenia Lopera Monsalve (ponente).

3. Antecedentes del Proyecto

Los organismos de acción comunal constituyen una de las expresiones más importantes de la democracia participativa en Colombia y han desempeñado un papel fundamental en la promoción del desarrollo comunitario, la integración social y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Su reconocimiento jurídico encuentra sustento en el artículo 38 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. A partir de este mandato constitucional, el legislador ha construido un marco normativo orientado a fortalecer la organización comunal como instrumento de gestión comunitaria y articulación entre el Estado y la ciudadanía.

En desarrollo de estos principios, la Ley 743 de 2002 estableció el régimen general de los organismos de acción comunal, regulando aspectos relacionados con su constitución, funcionamiento, organización interna y procesos electorales. Posteriormente, el Congreso de la República continuó fortaleciendo la institucionalidad comunal mediante diversas iniciativas legislativas, entre ellas la Ley 1989 de 2019, que creó incentivos y reconocimientos para los líderes y lideresas comunales, destacando el papel estratégico que cumplen estas organizaciones en la construcción de tejido social y desarrollo territorial.

Como resultado de este proceso de modernización normativa, se expidió la Ley 2166 de 2021, mediante la cual se derogó la Ley 743 de 2002 y se estableció un nuevo marco jurídico para los organismos de acción comunal. Esta ley fortaleció los mecanismos de participación democrática interna, definió nuevas herramientas para la formulación de la política pública comunal y reguló aspectos esenciales relacionados con la elección de dignatarios, los procesos de afiliación y el funcionamiento de los tribunales de garantías electorales. En particular, el artículo 36 fijó un calendario electoral para los distintos niveles de organización comunal, mientras que el artículo 35 fortaleció las funciones de los tribunales de garantías como instancias encargadas de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales.

No obstante, los avances introducidos por la Ley 2166 de 2021, la experiencia derivada de su implementación ha evidenciado algunas dificultades relacionadas con el cronograma electoral actualmente vigente. La coincidencia o cercanía temporal entre las elecciones de los organismos de acción comunal y otros procesos electorales de carácter nacional y territorial, especialmente las elecciones presidenciales, ha generado desafíos logísticos y organizacionales que afectan la adecuada preparación de los procesos electorales comunales,

limitan el ejercicio efectivo de las funciones de los tribunales de garantías y pueden incidir en los niveles de participación de los afiliados.

Adicionalmente, la experiencia institucional derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que obligó a modificar excepcionalmente los cronogramas electorales mediante disposiciones como la Resolución número 1513 de 2021 del Ministerio del Interior, puso de manifiesto la necesidad de contar con calendarios electorales más armónicos, flexibles y ajustados a las dinámicas propias de la organización comunal. Estas circunstancias evidenciaron la importancia de garantizar tiempos adecuados para los procesos de afiliación, depuración de libros, conformación de tribunales de garantías y organización de las jornadas electorales.

En este contexto, surge la presente iniciativa legislativa, cuyo propósito es ajustar el calendario electoral de los organismos de acción comunal previsto en la Ley 2166 de 2021, con el fin de evitar la concurrencia con otros procesos electorales, fortalecer las garantías democráticas, facilitar la supervisión de los procesos por parte de los tribunales de garantías y promover una mayor participación de los afiliados. De esta manera, se busca consolidar la institucionalidad comunal, fortalecer la confianza ciudadana en sus organizaciones de base y garantizar que los procesos electorales se desarrollen bajo principios de transparencia, legalidad, eficiencia y participación democrática.

4. Justificación del proyecto

La presente iniciativa legislativa surge de la necesidad de fortalecer los procesos democráticos de los organismos de acción comunal mediante la actualización y armonización del calendario electoral establecido en la Ley 2166 de 2021. Los organismos de acción comunal constituyen la expresión organizativa más amplia de participación ciudadana en Colombia y desempeñan un papel fundamental en la promoción del desarrollo comunitario, la gestión territorial y la construcción de tejido social. En consecuencia, resulta indispensable garantizar que sus procesos electorales se desarrollen en condiciones que aseguren la participación efectiva de los afiliados, la transparencia de las elecciones, la legalidad de los procedimientos y la legitimidad de los dignatarios elegidos.

La experiencia derivada de la aplicación de la Ley 2166 de 2021 ha permitido identificar dificultades asociadas al calendario electoral vigente, especialmente por la proximidad y coincidencia temporal de algunos procesos electorales comunales con elecciones de carácter nacional y territorial. Esta situación genera retos logísticos y administrativos que afectan la adecuada organización de las elecciones, dificultan la labor de supervisión de los tribunales de garantías y pueden limitar la participación de

los afiliados en la elección de sus representantes. Por ello, resulta necesario ajustar las fechas de elección de los distintos niveles de organización comunal, permitiendo una mejor planeación y ejecución de cada una de las etapas del proceso electoral.

Las disposiciones contenidas en el presente proyecto conservan la estructura institucional prevista en la Ley 2166 de 2021 y respetan plenamente la autonomía de los organismos de acción comunal. La reforma propuesta no crea nuevas obligaciones administrativas ni modifica las competencias de las organizaciones comunales o de las autoridades encargadas de su inspección, vigilancia y control. Su alcance se concentra en la reorganización del calendario electoral y en el fortalecimiento de las garantías necesarias para el adecuado desarrollo de los procesos democráticos internos, promoviendo una mayor coordinación entre los distintos actores involucrados.

Asimismo, el proyecto fortalece la función de los tribunales de garantías electorales, instancias encargadas de velar por la transparencia, imparcialidad y legalidad de las elecciones comunales. Al disponer de mayores márgenes de tiempo para adelantar actividades de verificación, control y resolución de controversias, estos órganos podrán ejercer sus funciones con mayor eficacia, reduciendo riesgos de conflictos, reclamaciones e impugnaciones que puedan afectar la legitimidad de los resultados electorales.

De igual manera, la iniciativa contribuye al fortalecimiento de los procesos de afiliación, actualización y depuración de registros de afiliados, aspectos fundamentales para garantizar la transparencia y confiabilidad de los censos electorales. Un calendario más organizado permitirá que estas actividades se desarrollen con la debida anticipación, brindando mayores garantías a los ciudadanos para ejercer sus derechos de participación dentro de las organizaciones comunales.

Desde una perspectiva institucional, la propuesta fortalece la seguridad jurídica de los organismos de acción comunal al establecer reglas más claras y cronogramas mejor articulados con el calendario electoral nacional. Ello permitirá una adecuada planeación de los procesos electorales, favorecerá la estabilidad de las organizaciones y contribuirá a prevenir situaciones que puedan afectar la continuidad de su gestión o generar incertidumbre respecto de la legitimidad de sus dignatarios.

Los beneficios esperados de la reforma se reflejan en una mayor participación de los afiliados en los procesos electorales, un fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia, una reducción de conflictos e impugnaciones electorales, una mejor organización de los procesos de afiliación y una mayor capacidad institucional de los organismos de acción

comunal para cumplir sus objetivos sociales y comunitarios. En consecuencia, la presente iniciativa no se limita a modificar unas fechas dentro del calendario electoral, sino que constituye una medida orientada a consolidar la democracia participativa, fortalecer la institucionalidad comunal y promover una gestión comunitaria más eficiente, transparente y legítima en beneficio de las comunidades colombianas.

5. Impacto fiscal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de ley no genera impacto fiscal adicional para la Nación ni para las entidades territoriales, por cuanto su objeto se limita a modificar el calendario electoral de los organismos de acción comunal previsto en la Ley 2166 de 2021, sin crear nuevas entidades, cargos, plantas de personal, fondos, programas, subsidios, transferencias o fuentes de financiación que impliquen apropiaciones presupuestales adicionales.

La iniciativa propuesta mantiene la estructura institucional existente y conserva las competencias actualmente asignadas a los organismos de acción comunal, a los tribunales de garantías y a las autoridades encargadas de las funciones de inspección, vigilancia y control. En consecuencia, la implementación de la presente ley podrá realizarse con cargo a los recursos humanos, técnicos y presupuestales ya previstos en el marco normativo vigente, sin requerir asignaciones adicionales por parte del Presupuesto General de la Nación ni de los presupuestos territoriales.

Asimismo, la modificación de las fechas electorales no implica la realización de nuevas jornadas electorales ni la creación de procedimientos adicionales, sino únicamente la reorganización temporal de actividades que actualmente se encuentran reguladas y financiadas dentro del funcionamiento ordinario de los organismos de acción comunal. Por tal razón, los costos asociados a la organización, supervisión y desarrollo de los procesos electorales continuarán siendo asumidos mediante los mecanismos y recursos ya existentes.

Por el contrario, se estima que la armonización del calendario electoral puede generar efectos positivos en términos de eficiencia administrativa y optimización de recursos, al evitar coincidencias con otros procesos electorales de carácter nacional y territorial, facilitar la planeación de las actividades de afiliación y control electoral, reducir la ocurrencia de conflictos e impugnaciones y fortalecer la gestión de los organismos de acción comunal.

En consecuencia, el presente proyecto de ley es fiscalmente neutro, toda vez que no ocasiona gasto público adicional ni afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, razón por la cual resulta compatible con las disposiciones contenidas

en la Ley 819 de 2003 sobre responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

6. Conflicto de interés

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política y en los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, modificados por la Ley 2003 de 2019, se procede a realizar el análisis de conflicto de interés respecto del presente proyecto de ley.

Se considera que la presente iniciativa no genera, en principio, conflicto de interés para los congresistas que participen en su discusión y votación, toda vez que su contenido es de carácter general, abstracto e impersonal. El proyecto tiene como finalidad ajustar el calendario electoral de los organismos de acción comunal y fortalecer las garantías para el desarrollo de sus procesos democráticos internos, sin establecer beneficios particulares, privilegios individuales o ventajas económicas para personas determinadas o determinables.

Las disposiciones contenidas en la iniciativa tienen alcance nacional y están dirigidas a la totalidad de los organismos de acción comunal del país, por lo que sus efectos se proyectan de manera general sobre la organización comunal colombiana y no sobre intereses particulares de los miembros del Congreso de la República.

No obstante, corresponde a cada congresista, en ejercicio de su deber constitucional y legal, evaluar de manera individual, autónoma y conforme a las circunstancias específicas de su situación personal, familiar, profesional o económica, la eventual existencia de una causal de conflicto de interés que pueda afectar su participación en el trámite de la presente iniciativa, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes.


Sin embargo, la decisión es meramente personal en cuanto a la consideración de hallarse inmerso en un conflicto de interés, por lo cual dejamos a criterio de los honorables Representantes basado en la normatividad existente y a juicio de una sana lógica.

7. Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia **positiva** y solicitamos a los honorables Representantes que integran la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dar primer debate al **Proyecto de Ley número 484 de 2025 Cámara, por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021**".

Cordialmente;


AGMETH JOSÉ ESCAF
TIJERINO
Ponente Coordinador
Representante a la Cámara por
Atlántico
Pacto Histórico


MARIA EUGENIA LOPERA
MONSALVE
Ponente
Representante a la Cámara por
Antioquia
Partido Liberal

8. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 484 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021.

* * *

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto modificar el calendario de elecciones de los organismos de acción comunal y armonizar los procedimientos con la Ley 2166 de 2021, garantizando que las elecciones se realicen de manera ordenada, transparente y en concordancia con el nuevo calendario electoral, así como fortalecer la ejecución de los procesos de afiliación y la función de los tribunales de garantías en los organismos comunales.

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021, el cual quedará así:

Artículo 36. *FECHA DE ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.* A partir del 2026 el proceso de elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal iniciará el año anterior a la elección de corporaciones públicas territoriales, en las siguientes fechas:

a) Junta de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, el último domingo del mes de julio y su período inicia el primero de septiembre del mismo año;

b) Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, el último domingo del mes de septiembre y su período inicia el primero de noviembre del mismo año;

c) Federaciones de Acción Comunal, el último domingo del mes de noviembre y su período inicia el primero de enero del año siguiente;

d) Confederación Nacional de Acción Comunal, el segundo domingo del mes de febrero y su período inicia el primero de abril del siguiente año;

Parágrafo 1º. Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales la autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones:

a) Suspensión del registro hasta por noventa (90) días;


b) Desafiliación de los miembros o dignatarios. Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de dignatarios cuyo incumplimiento acarreará la cancelación del registro.

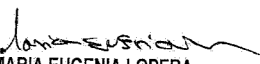
Parágrafo 2º. Cuando existiera justa causa, fuerza mayor o caso fortuito, para no realizar la elección, el organismo de acción comunal podrá solicitar autorización para elegir dignatarios por fuera de los términos establecidos. La entidad gubernamental que ejerce el control y vigilancia, con fundamento en las facultades desconcentradas mediante las Leyes 52 de 1990, 136 de 1994 y la Ley 753 de 2002 puede otorgar el permiso hasta por un plazo máximo de dos (2) meses.

Parágrafo 3º. El Ministerio del Interior podrá suspender las elecciones de dignatarios en todo o en parte de su jurisdicción, por motivos de orden público o cuando se presenten hechos o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 4º. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Cordialmente,


AGMETH JOSÉ ESCAF
TIJERINO
Ponente Coordinador
Representante a la Cámara por
Atlántico
Pacto Histórico


MARIA EUGENIA LOPERA
MONSALVE
Ponente
Representante a la Cámara por
Antioquia
Partido Liberal

TEXTOS DE PLENARIA

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 358 DE 2025 CÁMARA, 299 DE 2024 SENADO

por medio de la cual se declara patrimonio histórico, étnico y cultural de la nación el Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía (Atlántico) y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. La República de Colombia declara al Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía en el Departamento del Atlántico como patrimonio

histórico, étnico y cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2º. Declárese el 2025 como el año conmemorativo del Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía en el Departamento del Atlántico al cumplirse 151 años de la fundación del municipio de Santa Lucía.

Artículo 3º. Se incluirá dentro del presupuesto General de la Nación, del Departamento del Atlántico y del Municipio de Santa Lucía, las partidas para la construcción de “La Casa Museo Son de Negro” en el municipio de Santa Lucía, sede de la riqueza cultural del municipio.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para que, en cumplimiento del Presupuesto General de la Nación, otorgue las partidas presupuestales para concurrir a la finalidad de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social en el Municipio de Santa Lucía, Departamento del Atlántico, así:

a) Diseño, adquisición de terrenos, construcción y dotación de “La Casa Museo Son de Negro”.

b) Garantizar el funcionamiento de “La Casa Museo Son de Negro”.

Artículo 5°. El Congreso de la República declarará “La Casa Museo Son de Negro”, como Bien Cultural de Interés Público de la Nación y dispone que se adelanten los estudios y acuerdos necesarios por medio del Ministerio de Cultura, el Departamento del Atlántico y el Municipio de Santa Lucía para tal fin.

Artículo 6°. En homenaje al patrimonio histórico, étnico y cultural del Festival Nacional Son de Negro, se autoriza a la Nación para que, en convenio con el Departamento del Atlántico y el Municipio de Santa Lucía, se apropien los recursos y se convoque a un concurso de escultores del Departamento del Atlántico para la construcción de un monumento en memoria del Festival Nacional Son de Negro, para ser ubicado en “La Casa Museo Son de Negro” o en la “Plaza Son de Negro” a elección del municipio.

Artículo 7°. Las autorizaciones de gastos otorgados al Gobierno nacional en virtud de esta Ley se incorporarán en el presupuesto general de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal. En primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, acorde con las disponibilidades presupuestales que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 8°. En memoria y honor permanente al Festival Nacional Son de Negro y para dar testimonio ante la historia de la importancia de sus aportes a la construcción del arte, de la autenticidad para el pueblo Atlanticense, podrán el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Santa Lucía realizar de manera conjunta actividades culturales, cívicas y académicas cada año en el Municipio de Santa Lucía, el segundo día festivo de agosto –festivo de la Asunción de la Virgen–, con el fin de exaltar el patrimonio histórico, étnico y cultural del Festival Nacional Son de Negro.

Artículo 9°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en coordinación con el departamento y el municipio, para que de conformidad con sus

funciones constitucionales y legales contribuyan al fomento, salvaguardia, internacionalización, promoción, protección, divulgación, financiación y conservación de los valores culturales que se originan alrededor de las expresiones históricas y culturales que han hecho tradición al Festival Nacional Son de Negro, Santa Lucía.

Artículo 10. Autorícese al Gobierno nacional, al Gobierno departamental y al municipal a destinar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y de sus presupuestos locales respectivamente tendientes a:

a) Fortalecer y promover la conservación de las actividades culturales, musicales y artísticas que se dan en torno al Festival Nacional Son de Negro, Santa Lucía

b) Promover la divulgación y conservación de los valores culturales del Festival Nacional Son de Negro, Santa Lucía como Patrimonio Cultural de la Nación para garantizar su reconocimiento a nivel nacional e internacional y dinamizar el turismo en la región.

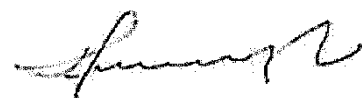
c) La creación y el fortalecimiento de escuelas de formación cultural. Estas escuelas tendrán como objetivo la enseñanza, preservación y difusión de las manifestaciones artísticas, musicales y dancísticas propias del Son de Negro, asegurando la transmisión de sus valores, tradiciones y saberes ancestrales a las nuevas generaciones.

d) Las demás que se consideren necesarias para proteger y promover el Festival Nacional Son de Negro, Santa Lucía como Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 11. El Gobierno nacional y los Gobiernos locales quedan autorizados para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a los que se autoricen apropiarse en sus respectivos presupuestos para cada vigencia fiscal, destinados al objeto a que se refiere la presente ley.

Artículo 12. Para el cumplimiento de los fines consagrados en la presente ley, se autoriza al Gobierno nacional, departamental y municipal suscribir los convenios y contratos que sean necesarios.

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.



DOLCEY OSCAR TORRES ROMERO
Ponente

Bogotá, D. C., junio 16 de 2025

En Sesión Plenaria Ordinaria del 10 de junio de 2026, fue aprobado en Segundo Debate, con modificaciones, el Texto Definitivo del **Proyecto de Ley número 358 de 2025 Cámara, 299 de 2024 Senado, por medio de la cual se declara patrimonio histórico, étnico y cultural de la nación el festival nacional son de negro de santa lucía atlántico y se dictan otras disposiciones**. Esto con el fin, que el citado proyecto siga su curso legal y reglamentario, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en Acta de Sesión Plenaria Ordinaria número 322 de junio 10 de 2026, previo su anuncio en Sesión Plenaria Ordinaria del 9 de junio de 2026, correspondiente al Acta número 321.



JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General

* * *

**TEXTO DEFINITIVO PLENARIA
CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
419 DE 2025 CÁMARA, 297 DE 2024 SENADO**

por la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 180 años de la Institución Educativa Santa Librada de Neiva: "patrimonio histórico y cultural de la nación" y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. Tiene como finalidad que la Nación se asocie a la conmemoración de los 180 años de fundación de la Institución Educativa Santa Librada, ubicada en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, a celebrarse el 26 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta los invaluable aportes y contribución a la construcción social de la realidad en correspondencia con los más altos valores y principios de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2º. Autorización obras conmemorativas. Autorízase al Gobierno nacional para que en cumplimiento y de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política de Colombia y de las disposiciones establecidas en la Ley 715 de 2001, el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 (FFIE) y la Ley 21 de

1982 para que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se incorpore al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024 los recursos necesarios para las siguientes obras:

1. Las obras contenidas en la Resolución número 3138 de 2019 del Ministerio de Cultura, de su competencia, que son urgentes, pues mitigan el inminente peligro para la vida de la comunidad académica. Y las obras adicionales contenidas allí que muestran deterioro significativo.

2. Remodelación de la planta física no incluida en la Resolución número 3138 de 2019 del Ministerio de Cultura.

3. Dotación de muebles y pupitres para los profesores y alumnos, equipos de cómputo y laboratorios.

4. Las obras de ornato como senderos y jardines.

5. La construcción de andenes y cobertizos sobre los andenes.

6. La construcción de parqueaderos para el estacionamiento de carros y motos de la comunidad académica y visitantes.

7. Obras de adoquinado en los patios contiguos a los bloques educativos y escenarios deportivos.

8. Reconstrucción de la fachada de la institución educativa.

9. Construcción de un local para la ubicación del gimnasio para la comunidad académica.

10. Construcción de un auditorio para eventos culturales, académicos y de grado.

Artículo 3º. Reconocimientos. La Nación a través del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, podrá otorgar los reconocimientos que a este plantel educativo se le deban tributar por su aporte al conocimiento y formación de la juventud huilense.

Artículo 4º. Autorización de vinculación presupuestal. Facúltase al Gobierno nacional para que en estricta sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes y programas educativos del Ministerio de Educación realice las operaciones y trámites correspondientes para ejecutar lo aquí señalado.

Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.



LUIS CARLOS OCHOA TOBON
Ponente

Bogotá, D. C., junio 16 de 2025

En Sesión Plenaria Ordinaria del 10 de junio de 2026, fue aprobado en Segundo Debate, con modificaciones, el Texto Definitivo del **Proyecto de Ley número 419 de 2025 Cámara, 297 de 2024 Senado**, por la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 180 años de la institución educativa santa librada de Neiva: "patrimonio histórico y cultural de la nación" y se dictan otras disposiciones. Esto con el fin, que el citado proyecto siga su curso legal y reglamentario, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en Acta de Sesión Plenaria Ordinaria número 322 de junio 10 de 2026, previo su anuncio en Sesión Plenaria Ordinaria del 9 de junio de 2026, correspondiente al Acta número 321.



JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General

CARTAS DE ADHESIÓN

CARTA DE ADHESIÓN COMO COAUTOR AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2025 CÁMARA

HONORABLE REPRESENTANTE CATHERINE JUVINAO CLAVIJO

por medio del cual se garantiza la destinación de recursos para los Sistemas de Transporte Públicos del país y se dictan otras disposiciones.

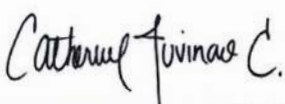
Bogotá D.C, 17 de junio de 2026


Respetado
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad


Asunto: Solicitud de adhesión como coautor al **Proyecto de Ley No. 189 de 2025 Cámara** "Por medio del cual se garantiza la destinación de recursos para los Sistemas de Transporte Públicos del país y se dictan otras disposiciones".

De manera respetuosa y de conformidad con lo establecido en la Ley 5 de 1992, me permito solicitar que se me adhiera como coautor del **Proyecto de Ley No. 189 de 2025 Cámara** "Por medio del cual se garantiza la destinación de recursos para los Sistemas de Transporte Públicos del país y se dictan otras disposiciones".

Cordialmente,


CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO
Representante a la Cámara - *Autora*



ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO

ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERESES

HONORABLE REPRESENTANTE ÁLVARO LEONEL RUEDA CABALLERO

(Periodo Constitucional 2022-2026)

Bogotá, D.C., 09 de junio de 2026

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad

Respetado Secretario:

Conforme a la Ley 2003 (19 de Nov) de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 en sus artículos 286 y 287 "Régimen de Conflicto de Interés de los Congresistas", presento el registro de la siguiente novedad para su inclusión en el Libro de Registro de Intereses Privados.

Cordialmente,

Álvaro Leonel Rueda Caballero
ÁLVARO LEONEL RUEDA CABALLERO
Representante a la Cámara
Departamento de Santander

ALVARO RUEDA
CONGRESISTA POR SANTANDER

Camara de Representantes
Secretaría General
CORRESPONDENCIA
16 JUN 2026

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| Secretaría General | | CÓDIGO | M-31C-P015 |
| FORMATO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS | | VERSIÓN | 1 - 3020 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

LIBRO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS
"CON VIGENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 2003 DEL 16 DE NOV DE 2019"
CONFLICTOS DE INTERÉS

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA REGISTRO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2003 (19 DE NOV) DE 2019, (POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 5 DE 1992 EN SUS ARTICULOS 286 Y 287 "RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONGRESISTAS")

ARTICULO 286. LE C) BENEFICIO DIRECTO: AQUEL QUE SE PRODUZCA DE FORMA ESPECIFICA RESPECTO DEL CONGRESISTA, DE SU CONYUGE, COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE, O PARIENTES DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.

Artículo 287. Registro de Intereses.

En este registro se debe incluir la siguiente información:

a) Actividades económicas; Incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con animo o sin animo de lucro, nacional o extranjera.

Ninguna

b) Cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

Ninguna

c) Pertenencia y participación en juntas o consejos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

Ninguna

d) Una declaración sumaria de la información que sea susceptible de generar conflicto de intereses respecto de su conyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil sin que sea obligatorio especificar a que pariente corresponde cada interés.

Presento conflicto de intereses por consanguinidad en primer y segundo grado con personas vinculadas al sector educación

e) Copia del Informe de Ingresos y gastos consignado en el aplicativo "Cuentas Claras" de la campaña a la que fue elegido, (se anexa).

| | |
|--|----|
| SI | NO |
| FIRMA: <i>Álvaro Leonel Rueda Caballero</i> | |
| Firmar en el legajo del Congreso | |
| C.C. No. 1.102.378.853 | |
| NOMBRE: <i>Álvaro Leonel Rueda Caballero</i> | |
| PARTIDO: <i>Partido Liberal Colombiano</i> | |
| CIRCUNSCRIPCIÓN: <i>Santander</i> | |
| FECHA: <i>Junio 09 de 2026</i> | |

ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERESES

HONORABLE REPRESENTANTE GERMÁN TIBERIO OJEDA PEDRAZA

(Periodo Constitucional 2022-2026)

Bogotá D.C., 09 de junio de 2026

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
 Secretario General
 Cámara de Representantes
 Ciudad.

**Asunto: "Radicación Conflicto de Interés,
 Libro de Registro de Intereses privados"**

Respetado Señor Secretario,

En atención al asunto de la referencia y en cumplimiento de la Ley 5ª de 1992 y la Ley 2003 de 2019, dado que tome posesión a partir del día 05 de junio de 2026, me permito radicar el Formato de Conflicto de Intereses Privados.

Lo anterior para que obre a los fines pertinentes a que haya lugar.

Atentamente,

[Firma]
GERMÁN TIBERIO OJEDA PEDRAZA
 Representante a la Cámara
 Circunscripción de Boyacá


Camara de Representantes
Secretaria General
CORRESPONDENCIA
 09 JUN 2026
 Radicado No. *[Handwritten]*
 Radicado Por *[Handwritten]*

| Secretaría General | |
|---|---|
| FORMATO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS | CODIGO: M-2LC-F016 VERSION: 1 - 2020 PAGINA: 1 DE 2 |
| LIBRO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS | |
| "CON VIGENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 2003 DEL 16 DE NOV DE 2019" | |
| CONFLICTOS DE INTERÉS | |
| LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA REGISTRO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2003 (19 DE NOV) DE 2019 POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 5ª DE 1992 EN SUS ARTICULOS 286 Y 287 "RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONGRESISTAS" | |
| ARTICULO 286. Lit C) BENEFICIO DIRECTO: AQUEL QUE SE PRODUZCA DE FORMA ESPECIFICA RESPECTO DEL CONGRESISTA, DE SU CONYUGE, COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE, O PARIENTES DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. | |
| Artículo 287. Registro de Intereses. En este registro se debe incluir la siguiente información: | |
| a) Actividades económicas; incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera. <i>N/A.</i> | |
| b) Cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección. <i>N/A.</i> | |

c) Pertenencia y participación en juntas o consejos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.
N/A.

d) Una declaración sumaria de la información que sea susceptible de generar conflicto de intereses respecto de su conyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil sin que sea obligatorio especificar a que pariente corresponde cada interés.
N/A.

e) Copia del informe de ingresos y gastos consignado en el aplicativo "Cuentas Claras" de la campaña a la que fue elegido, (se anexa).
 SI NO

FIRMA: *[Firma]* C.C. No. 71372131
 Firmar en el logo del Congreso

NOMBRE: *GERMÁN TIBERIO OJEDA P.* FECHA: 09/06/2026
 PARTIDO: *ALIANZA VERDE*
 CIRCUNSCRIPCIÓN: *DEPARTAMENTAL*

ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERESES

HONORABLE REPRESENTANTE GILDARDO SILVA MOLINA

(Periodo Constitucional 2022-2026)

Bogotá junio 09 de 2026

GILDARDO SILVA
CONGRESISTA

FACTO
HISTÓRICO

UP
UNIÓN PACTO

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA,
Secretario General
Cámara de Representantes

Asunto: ENTREGA FORMATO REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante a la Cámara del Congreso de la República, me permito hacer entrega del formato de registro de intereses privados actualizado con modificación por ingreso de mi hijo a la entidad de la DIAN.

Por su atención y su Tiempo muchas gracias.

Cordialmente,

Camara de Representantes
Secretaría General
CORRESPONDENCIA

11 JUN 2026

Validado Por: *[Firma]*

GILDARDO SILVA MOLINA
Representante Valle del Cauca
Pacto - UP

Adjunto documento

| Secretaría General | | CÓDIGO | M-2LC-F016 |
|---|--|---------|------------|
| FORMATO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS | | VERSIÓN | 1 - 2020 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

LIBRO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS
"CON VIGENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 2003 DEL 16 DE NOV DE 2019"

CONFLICTOS DE INTERÉS
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA REGISTRO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2003 (19 DE NOV) DE 2019, POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIAMENTE LA LEY 5 DE 1992 EN SUS ARTICULOS 286 Y 287 "RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONGRESISTAS"

ARTÍCULO 286. LIT C) BENEFICIO DIRECTO: AQUEL QUE SE PRODUZCA DE FORMA ESPECÍFICA RESPECTO DEL CONGRESISTA, DE SU CONYUGE, COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE, O PARIENTES DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.

Artículo 287. Registro de Intereses.
En este registro se debe incluir la siguiente información:

a) Actividades económicas; incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera.

Ninguna

b) Cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

- Presidente de la junta Departamental de la Unión Patriótica en el Valle del Cauca (No remunerado)
- Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica (No remunerado)

c) Pertenencia y participación en juntas o consejos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

Ninguna

d) Una declaración sumaria de la información que sea susceptible de generar conflicto de intereses respecto de su conyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil sin que sea obligatorio especificar a que pariente corresponde cada interés.

Si Mi hijo Andres Felipe Silva Acosta labora en la DIAN DSI CAU como gestor OI GIU Gbro coactivo x ejecución fiscal ingreso el 19 de mayo 2026.

e) Copia del informe de Ingresos y gastos consignado en el aplicativo "Cuentas Claras" de la campaña a la que fue elegido, (se anexa).

SI NO

FIRMA: *[Firma]* C.C. No. 6299834

NOMBRE: *Gildardo Silva Molina* FECHA:

PARTIDO: *Coalición Pacto Histórico*

CIRCUNSCRIPCIÓN: *Valle del Cauca.*

ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERESES

HONORABLE REPRESENTANTE JUAN CAMILO LONDOÑO BARRERA

(Periodo Constitucional 2022-2026)

CAMILO
 REPRESENTANTE A LA CÁMARA
 REPRESENTANTE 2022-2026-2030

Bogotá, 14 de mayo de 2026

Doctor
JAIME LUÍS LACOUTURE PEÑALOZA
 Secretario General
 Cámara de Representantes
 Ciudad

Asunto: Reporte de novedad conflicto de interés.

Cordial saludo,

Con la presente me permito reportar novedad en el registro de conflicto de interés, en atención a lo dispuesto por los artículos 286, 291 y 292 de la Ley 5ª de 1992, manifestando que, retiro el posible conflicto de interés respecto al literal d, sobre: **"Existe un posible conflicto de interés en momento de darse discusión y/o votación de proyectos de Ley relacionados con el sector educativo, ya que tengo un familiar en primer grado de consanguinidad que actualmente ocupa el cargo de rector en un colegio privado. (Padre)"**

Agradezco de antemano la atención prestada, quedo atento a cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,


JUAN CAMILO LONDOÑO BARREA
 Representante a la Cámara
 Departamento de Antioquia

Cámara de Representantes
 Secretaría General
CORRESPONDENCIA
 14 MAY 2026
 Radicado No. _____
 Recibido Por: _____

| | |
|--|--------------------|
| Secretaría General | |
| FORMATO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS | CÓDIGO: M-31C-1018 |
| | VERSIÓN: 1-2020 |
| | PÁGINA: 1 DE 2 |

LIBRO DE REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS
 "CON VIGENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 2003 DEL 16 DE NOV DE 2019"

CONFLICTOS DE INTERÉS

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA REGISTRO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2003 (19 DE NOV) DE 2019, POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 5 DE 1992 EN SUS ARTICULOS 286 Y 287 "RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONGRESISTAS"

ARTICULO 286. LIT C) BENEFICIO DIRECTO: AQUEL QUE SE PRODUZCA DE FORMA ESPECÍFICA RESPECTO DEL CONGRESISTA, DE SU CONYUGE, COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE, O PARIENTES DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.

Artículo 287. Registro de Intereses.
 En este registro se debe incluir la siguiente información:

a) Actividades económicas; incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera.

N/A

b) Cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

N/A

c) Pertenencia y participación en juntas o consejos directivos en el año inmediatamente anterior a su elección.

N/A

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
 Carrera 7ª N° 8 - 88 Ed. Nuevo del Congreso
 Carrera 8ª N° 12 B - 42 Dir. Administrativo
 Bogotá D.C. Colombia.

www.camara.gov.co
 Twitter: @camaracolombia
 Facebook: camaraderepresentantes
 PBX: (+57) 6011 8770730
 Línea Gratuita: 018000423532



d) Una declaración sumaria de la información que sea susceptible de generar conflicto de intereses respecto de su conyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil sin que sea obligatorio especificar a que pariente corresponde cada interés.

*Existe un posible conflicto de interés en momento de darse discusión y/o votación de proyectos de Ley relacionados con el sector ambiental, ya que mi cónyuge actualmente trabaja como contratista en ámbito público. Existe un posible conflicto de interés en momento de darse discusión y/o votación de proyectos de Ley relacionados con contratistas y privados, ya que mi cónyuge actualmente trabaja como contratista. (Esposa)

*Existe un posible conflicto de interés en momento de darse discusión y/o votación de proyectos de Ley relacionados con el sector ambiental, ya que tengo un familiar en segundo grado de consanguinidad, que actualmente trabaja como contratista en ámbito público. Existe un posible conflicto de interés en momento de darse discusión y/o votación de proyectos de Ley relacionados con contratistas y privados, ya que tengo un familiar en segundo grado de consanguinidad, que actualmente trabaja como contratista. (Hermana)

e) Copia del informe de ingresos y gastos consignado en el aplicativo "Cuentas Claras" de la campaña a la que fue elegido, (se anexa).

| | | | |
|----|----|---|--|
| SI | NO | X | El documento y a reposa en la carpeta de archivo, correspondiente al Representante, en la secretaria de la Cámara de Representantes. |
|----|----|---|--|

FIRMA:
 Firmar en el logo del Congreso   **C.C. No. 71368204**

NOMBRE: Juan Camilo Londoño Barrera **FECHA:** 14/mayo/2026

PARTIDO: Alianza Verde

CIRCUNSCRIPCIÓN: Antioquia

CONTENIDO

Gaceta número 736 - Jueves, 18 de junio de 2026

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

Págs.

| | |
|---|----|
| Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley número 294 de 2025 Cámara, por medio del cual se establecen los mecanismos para fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales, el aseguramiento en vida y sus coberturas asociadas, así como propender por el óptimo uso de sus recursos y se crea el beneficio de protección para ocupaciones informales..... | 1 |
| Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley número 304 de 2025 Cámara, por medio de la cual se fija el salario mínimo profesional, tecnológico y técnico en Colombia..... | 7 |
| Informe de ponencia positiva para primer debate al Proyecto de Ley número 484 de 2025 Cámara, por medio del cual se ajusta el calendario electoral de los organismos de acción comunal y se modifica el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021..... | 10 |

TEXTOS DE PLENARIA

| | |
|--|----|
| Texto definitivo plenaria cámara al Proyecto de Ley número 358 de 2025 Cámara, 299 de 2024 senado, por medio de la cual se declara patrimonio histórico, étnico y cultural de la nación el Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía (Atlántico) y se dictan otras disposiciones..... | 14 |
| Texto definitivo plenaria cámara al Proyecto de Ley 419 de 2025 Cámara, 297 de 2024 Senado, por la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 180 años de la Institución Educativa Santa Librada de Neiva: “patrimonio histórico y cultural de la nación” y se dictan otras disposiciones..... | 16 |

CARTAS DE ADHESIÓN

| | |
|---|----|
| Carta de adhesión como coautor al Proyecto de Ley número 189 de 2025 Cámara, honorable representante Catherine Juvinao Clavijo, por medio del cual se garantiza la destinación de recursos para los Sistemas de Transporte Públicos del país y se dictan otras disposiciones..... | 17 |
|---|----|

ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES EN EL LIBRO DE REGISTRO

| | |
|--|----|
| Actualización y novedades en el libro de registro de conflictos de intereses, honorable representante Álvaro Leonel Rueda Caballero..... | 18 |
| Actualización y novedades en el libro de registro de conflictos de intereses, honorable representante Germán Tiberio Ojeda Pedraza..... | 19 |
| Actualización y novedades en el libro de registro de conflictos de intereses, honorable representante Gildardo Silva Molina..... | 20 |
| Actualización y novedades en el libro de registro de conflictos de intereses, honorable representante Juan Camilo Londoño Barrera..... | 21 |